

[China web feature – launching 22 March 2004]

¿Ejecuciones “con arreglo a la ley”? La pena de muerte en China

En la República Popular de China se siguen llevando a cabo más ejecuciones judiciales que en el total del resto del mundo. Pese a tener la mayor tasa de población del mundo, la proporción de personas a las que se ejecuta en China es posiblemente mayor que la de ningún otro país, excepción hecha de Singapur, cuya población es de las menores del mundo.

Una legislación regida por la arbitrariedad

En el trasfondo de estos hechos subyace un sistema de justicia penal que no garantiza ni puede garantizar un juicio justo en virtud del derecho internacional a ningún acusado. A menudo, a los encausados se les niega en China el derecho a disponer de asistencia letrada hasta después de haber sido interrogados e, incluso entonces, el acceso a los profesionales del derecho está severamente restringido en la práctica. El periodo previo a la reclusión y el de detención preventiva suelen responder a criterios arbitrarios y su duración ha sido en un caso extremo de hasta 28 años. La tortura es una práctica muy extendida entre la policía china, y no existe disposición alguna en la legislación del país asiático que impida que en los juicios se admitan las "confesiones" u otras "pruebas" conseguidas mediante tortura. En la práctica, no existe la presunción de inocencia.

"¿Qué pruebas puede aportar para demostrar que usted no cometió el asesinato?" Palabras de un juez adscrito a un tribunal superior en la provincia de Heilongjiang antes de dictar una condena a muerte, pese a la inexistencia de pruebas suficientes. *Beijing Youth Daily*, 28 de abril de 2002.

Presión e injerencia política

A menudo los juicios y los procesos de apelación son sumarios. Y lo que es más, en China no existe la independencia de la judicatura. El Partido Comunista Chino, en el poder, influye en todos los niveles del proceso judicial y, en concreto, los órganos del Partido dirigen y supervisan la acción de los tribunales.

La presión política sobre el proceso judicial se hace particularmente patente durante las campañas denominadas oficialmente "de mano dura", en las que la policía, los fiscales y los jueces son sometidos a presión para demostrar agilidad y resolver causas a expensas del rigor y la justicia.

“Los jueces deben aumentar de hecho el liderazgo del Partido en su trabajo en los tribunales populares”. Luo Gan, director del Comité Central para la Gestión de la Seguridad Pública. *Xinhua*, 17 de diciembre de 2003.



Se dictó la condena a muerte para esta mujer, quien fue ejecutada con carácter inmediato junto con otras tres personas por cargos relacionados con el narcotráfico. 26 de junio de 2003 (Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas). © sina.com.cn

La muerte resulta económica

Además de estas claras discrepancias con el derecho y las normas internacionales, en China se sigue ejecutando a un número ingente de personas. De manera flagrante, en determinados ámbitos se habló de una reciente decisión dirigida a promover la inyección letal como forma de ejecución en el país en términos de alternativa “económica” y más eficaz que la ejecución mediante disparo, lo que con toda probabilidad originará un índice de ejecuciones aún mayor. El uso de cámaras de ejecución móviles –autobuses reconvertidos en los que puede ejecutarse a los condenados mediante inyección letal “inmediatamente después del dictado de la condena”– está muy extendido en todo el país.

“Todos los presentes pensaron que la inyección letal era un método muy civilizado y científico de aplicación de la pena de muerte”. 18 de septiembre de 2001. www.people.com.cn

La inyección letal no supera las objeciones fundamentales a la pena de muerte. Un condenado –sea inocente o culpable de los cargos que se le imputan– ha de afrontar la amenaza inminente de la muerte a manos del Estado, mientras se lo mantiene en condiciones de reclusión extremadamente severas. La promoción de una forma “humana” de matar personas a manos del Estado difícilmente puede considerarse señal de una sociedad “civilizada”.



Reproducción de una escena de ejecución creada por la agencia de noticias china CNS. 18 de enero de 2003. © CNS

Desprecio a la ley

El gobierno chino no sólo desprecia las normas internacionales cuando aplica la pena de muerte, también desatiende su propia legislación interna. Pese a la prohibición existente de ejecutar a menores que cometen un delito sancionado con la pena de muerte cuando tienen menos de 18 años, China ejecutó a un hombre en enero de 2003 por un delito cometido con 16 años. La ley china prohíbe la tortura, pero ésta sigue estando extendidísima y las "pruebas" extraídas mediante tortura y otros medios ilegales siguen utilizándose para condenar a muerte a personas.

Morir por el cambio

Amnistía Internacional se opone a la pena capital por considerar que constituye la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida. Nunca se ha demostrado que su efecto sobre el delito sea especialmente disuasorio. Es más, China sigue siendo testigo del aumento de sus niveles de delincuencia a pesar del ingente número de ejecuciones que se llevan a cabo en su territorio.

En vista de las profundas irregularidades de que adolece el sistema de justicia penal de China, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al gobierno chino para que imponga la suspensión de la aplicación de la pena de muerte con carácter inmediato.

Durante el periodo de suspensión que preceda a la abolición completa de la pena de muerte, la Asamblea Legislativa china debe actuar para garantizar que las leyes y prácticas internas son coherentes con las obligaciones que China ha contraído con la comunidad internacional en forma de la ratificación de tratados de derechos humanos, y para se produzcan claros avances en el camino a la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.